

El Salvador proceso

informativo semanal

año 10
número 416

febrero 7
1990

ISSN 0259-9864

centro universitario de documentación e información

- La depuración del ejército
- La larga marcha de la guerra
- Movimiento laboral de resistencia
- Malestar empresarial
ante las medidas de ajuste
- Hacia un nuevo horizonte regional

La depuración del ejército

La invasión norteamericana a Panamá lesionó gravemente un principio, si no absoluto, sí fundamental para la convivencia internacional, el de la libertad de autodeterminación de los pueblos. Además, acarreó otros males al pueblo panameño, entre ellos 220 víctimas mortales civiles y 314 de las Fuerzas de Defensa, y daños por 1,500 millones de dólares (unas 15 veces más que las pérdidas económicas que, según las estimaciones del Ministerio de Planificación, causó la ofensiva del FMLN en noviembre). Sin embargo, pese a todo ello, debe reconocerse que la intervención también trajo algunos bienes, contados, pero importantes. Sin duda, el principal de todos ha sido la captura de Noriega y la degradación de 81 oficiales de las Fuerzas de Defensa, incluido todo su Estado Mayor.

Guillermo Endara podrá ser un lítere de Estados Unidos, pero formuló un par de frases profundas cuando interpretó la demolición del cuartel central de Noriega como "la terminación de la era donde predominaba lo militar". "Hoy queremos convertir, de estas cenizas del militarismo, un proyecto de viviendas para el bienestar de los más humildes", añadió. El Presidente Oscar Arias, buen conocedor de las bondades que representa para un país el no tener ejército, se apresuró a recomendarle que aprovechara la ocasión para suprimir de una vez por todas las fuerzas armadas panameñas. El Arzobispado de Panamá ha apoyado la idea con entusiasmo.

Aunque por el momento se trate de una utopía, la recomendación de Arias bien podría generalizarse a toda América Latina. Al igual que ocurrió con la "guerra" de Las Malvinas, la intervención norteamericana en Panamá ha puesto de manifiesto otra vez que los ejércitos latinoamericanos, acostumbrados a masacrar campesinos y obreros desarmados, estudiantes, intelectuales, sacerdotes, ancianos, mujeres y niños, no son capaces de medirse militarmente con un ejército profesional. Ese fue el caso del ejército argentino frente a los ingleses y ése ha sido el caso de las Fuerzas de Defensa de Panamá ante el comando sur. Si, pues, ante la agresión externa de una fuerza militar profesional, los ejércitos latinoamericanos son incapaces de salvaguardar la "soberanía" de nuestros pueblos, ¿cuál es su razón de ser?

Mutatis mutandis, no hay ninguna objeción de principio para referir esta reflexión a El Salvador. De hecho, la reflexión ya se ha planteado públicamente en diversas oportunidades. Todavía no se ha pedido suprimir a la Fuerza Armada, pero sí constituir una fuerza militar verdaderamente profesional cuyas dimensiones se adecúen a las necesidades reales del país, subordinada al poder civil y respetuosa de los derechos humanos. Como es comprensible, ha sido el

FMLN quien más ha insistido en este punto. El argumento de fondo, según lo ha formulado el comandante Joaquín Villalobos, estriba en que "el ejército sigue siendo el poder fundamental en el país y para que haya proceso democrático es necesario limitar su poder y limpiarlo de todos los asesinos" (ECA marzo 1989, p. 220).

El hecho de que la propuesta provenga de Villalobos no la hace necesariamente insensata. Por lo demás, hay algunos antecedentes históricos sobre la viabilidad de la depuración de la Fuerza Armada. Con ocasión del golpe del 15 de octubre de 1979, la juventud militar purgó a unos 40 oficiales. En 1984, al asumir la Presidencia de la República, el Ing. Duarte se valió del apoyo incondicional que en aquel momento le daba la administración Reagan para remover a varios militares, a quienes se vinculaba con los escuadrones de la muerte, entre ellos los coroneles Nicolás Carranza y Mario Denis Morán. (Dicho sea de paso, la prensa norteamericana ha informado que, tras la toma del poder ejecutivo por ARENA, algunos de ellos han empezado a regresar al país).

Desde luego, el FMLN tiene intereses muy claros al promover la depuración del ejército. Pero el criterio no debiera ser si ésta favorece o no al FMLN, sino si traería o no beneficios para el país. Más aún, si dicha propuesta se implementara con suficiente radicalidad, el FMLN sería el más perjudicado. De otro modo, Estados Unidos no estaría presionando para depurar y profesionalizar a la Fuerza Armada. De labios afuera, incluso el Alto Mando castrense ha empezado a comprenderlo así. En su oportunidad, tanto el anterior Ministro de Defensa, general Vides Casanova, como el actual, general Larios, se han manifestado abiertos a la posibilidad de estudiar la reducción del ejército, dependiendo de las necesidades del país. Más recientemente, con ocasión de la consignación del coronel Benavides y demás oficiales implicados en la masacre de la UCA, incluso militares reputados de línea dura, como el coronel Elena Fuentes y el coronel Ochoa Pérez, han manifestado que la institución armada no está dispuesta a admitir abusos de poder por parte de ninguno de sus integrantes. "El ser militar no le da a uno licencia para matar", expresó el coronel Ochoa Pérez (*Diario Latino*, 11 enero 1990). Estas afirmaciones son importantes, tomando en cuenta que la trayectoria del ejército exhibe, precisamente, una historia de impunidad para asesinar.

Se han dado pasos importantes en la profesionalización de la Fuerza Armada, pero aún resta bastante por hacer. El propio Presidente Bush ha admitido que Cristiani no controla del todo a los militares. Por eso es necesario consolidar la subordinación de la institución castrense al poder civil, hasta el momento todavía precaria. El P. Ellacuría insistió en ello muchas veces: "No habrá democracia sin la democratización de la Fuerza Armada" (ECA marzo 1989, p. 188).

La larga marcha de la guerra

El inusitado repunte ofensivo del FMLN acaecido durante el último bimestre de 1989 ha dado paso durante el primer mes del presente año a una situación de impasse cuya resolución ha intentado lograr la Fuerza Armada a través de las operaciones ofensivas "Victoria", la cual se desarrolla en todo el país, y "Martillo", concentrada en las faldas del volcán Chinchontepec (San Vicente) y en algunas zonas del departamento de La Paz. En el marco de estas operaciones, especialmente de la "Victoria", la Fuerza Armada asegura que durante el mes de enero sus fuerzas han causado 191 bajas mortales y 89 heridos al FMLN. De acuerdo a los informes de la prensa nacional, cuya fuente es el COPREFA, las bajas rebeldes habrían ocurrido durante el desarrollo de 59 combates de encuentro y 19 acciones ofensivas insurgentes.

Las fuerzas rebeldes continúan embarcadas en un aparente proceso de reacomodos logísticos, territoriales y de sus cuadros, que podría ser lo que explica la ausencia de alguna maniobra con operaciones simultáneas durante el primer mes del año. A pesar de ello, el FMLN ha mantenido niveles de operatividad comparables a los observados durante los meses anteriores a noviembre pasado. En lo referente al sabotaje a la infraestructura económica, la actividad guerrillera ha alcanzado niveles que han obligado a la adopción de planes de contingencia como el anunciado por el ejército el 3 de febrero, pero cuya operativización se inició, de hecho, a partir del 31 de enero. Según la Fuerza Armada, el propósito de tales medidas es, fundamentalmente, contrarrestar la campaña dinamitera emprendida por la guerrilla contra locales comerciales en San Salvador y zonas periféricas, la cual ha afectado ya a por lo menos 10 firmas comerciales durante el mes.

Según un vocero del COPREFA, en la operación participan numerosos efectivos de la Fuerza Armada, Policía Nacional y Policía de Hacienda. No obstante, en los primeros días de febrero han sido dinamitados otros 5 establecimientos. Aparte de la imposibilidad práctica del ejército y de las fuerzas policiales para contrarrestar este tipo de actos, se ha evidenciado que el sabotaje disminuye la capacidad de absorción de la ayuda militar norteamericana y obliga a la Fuerza Armada a reorientar su estrategia contrainsurgente, lo cual constituye por sí mismo un objetivo de naturaleza eminentemente militar, aun cuando por otro lado quede en pie la cuestión de los enormes costos políticos que el sabotaje le acarrea al FMLN.

Comoquiera que sea, el FMLN parece tener resuelta teóricamente la cuestión y ha venido arreciando sus acciones de sabotaje a nivel nacional. Incluso ha realizado ataques de considerable alcance contra puestos militares cuyo objetivo primordial es resguardar instalaciones fabriles o de procesamiento de productos de exportación. Así, el 28 de enero, atacó el ingenio "Chaparrastique" y una fábrica de jabón cercana al mismo, en las afueras de San Miguel. Según fuentes castrenses, en estas acciones el FMLN utilizó no menos de 150 milicianos, quienes atacaron el puesto de vigilancia del ingenio, destruyeron 5 camiones y provocaron daños parciales en otros 4. Simultáneamente, otro grupo de insurgentes destruyó las oficinas, bodegas y 2 vehículos de la fábrica citada. Aunque no se informó de bajas, el alcance de la acción muestra elevados niveles de operatividad en las filas rebeldes, los cuales posibilitan operaciones que implican trabar combates con fuertes contingentes del ejército.

En los últimos días del mes, de acuerdo a fuentes vinculadas a la CEL, el FMLN

destruyó por lo menos 133 postes del tendido eléctrico sólo en el departamento de Usulután, y atacó las instalaciones de la subestación eléctrica "Natividad", ubicada en las afueras de la ciudad de Santa Ana. El ataque fue repelido sin mayores consecuencias. El parte de guerra mensual de la guerrilla, en lo referente al sabotaje, da cuenta de la destrucción de 226 estructuras del sistema eléctrico, 2 almacenes, una fábrica de jabón y daños parciales a un puente del departamento de Sonsonate.

Concomitantemente con el sensible incremento del sabotaje, el FMLN también ha emprendido acciones de naturaleza militar durante el primer mes del año, aunque su cualidad y cantidad no sugieren la existencia de directrices guerrilleras tendientes a intensificar la actividad militar. Los 59 combates contingenciales y las 19 acciones ofensivas se habrían distribuido en 13 de los 14 departamentos del país en la forma siguiente: en Chalatenango ocurrieron 12 combates y 5 ataques; en La Libertad, 3 combates y 4 ataques; en San Salvador, 4 combates y 8 ataques; en Cuscatlán, 6 combates; en Cabañas, 4 combates y 1 ataque.

En la zona oriental, que comprende los departamentos de San Miguel, Morazán, La Unión y Usulután, ocurrieron 17 combates y 2 acciones ofensivas, lo cual refleja la baja operatividad guerrillera en aquella región. En La Paz hubo 2 combates, mientras que en el departamento de San Vicente fueron 5. En la zona occidental, en la comprensión de Santa Ana, hubo 4 combates. Como se apuntó más arriba, en estas acciones perecieron 191 guerrilleros y resultaron heridos 89; por su parte, la Fuerza Armada habría sufrido un total de 32 muertos y 28 heridos.

De acuerdo a radio Venceremos, la marcha de la guerra tendría un ritmo mucho más acelerado de lo que el COPREFA

acepta. En su parte de guerra de enero, el FMLN asegura haber causado 532 bajas al ejército, entre muertos y heridos, incluyendo a 10 oficiales. Asimismo, el FMLN asegura haber realizado 17 emboscadas en todo el país, destruido 12 camiones militares y una avioneta, y averiado otras 14 aeronaves, entre las cuales se cuentan 10 helicópteros de fabricación norteamericana.

El empeño militar de ambas partes aún persiste, como lo evidencian los partes de guerra de los bandos. Más aún, de cara al futuro inmediato, las señales proyectadas por ambas partes sugieren la existencia de preparativos para nuevos esfuerzos ofensivos. La Fuerza Armada continúa incorporando nuevos efectivos a sus filas, para lo cual ha venido haciendo reclutamientos selectivos en las zonas rurales; además, aún está vigente la convocatoria a los reservistas para que se reincorporen al ejército. La preparación de fuerzas élite también continúa, como se evidenció a finales de mes cuando fueron juramentados nuevos comandos del Batallón Belloso. Pocos días antes, en Usulután fueron creados dos nuevos batallones contrainsurgentes denominados "Usulután" y "Herson Calitto".

La actividad militar ha sido acompañada con acciones cívicas, algo propio de la estrategia de baja intensidad. En Mejicanos, al norte de San Salvador, la Fuerza Armada proporcionó materiales de construcción a cerca de 7 mil familias de comunidades marginales cuyas viviendas resultaron dañadas por los combates ocurridos en noviembre a raíz de la ofensiva guerrillera; en Cacaopera (Morazán), tropas del Destacamento Militar No. 4 y personal de la Comisión Nacional de Restauración de Áreas (CONARA) obsequiaron material didáctico y alimentos, y brindaron asistencia médico-odontológica a las poblaciones; en Chalate-

nango, el ejército repartió cerca de 4 millones de colones entre 7 alcaldes de igual número de municipios, con el presunto propósito de llevar a cabo 47 proyectos de salud, educación y desarrollo vial del plan "Chalatenango nuestro"; mientras que en Morazán se distribuyeron 3 millones de colones entre 20 alcaldes para el desarrollo de obras de interés común del plan "Oriente tiene valor".

En este contexto de acciones psicológicas, el asunto más espinoso para el ejército es, aparentemente, la repatriación de los refugiados radicados en Honduras, debido a la presunta simpatía que éstos tienen por el FMLN, según lo han denunciado en repetidas oportunidades voceros del gobierno y de la Fuerza Armada. Los lugares asignados para asentar a los repatriados están ubicados en Los Hatos, El Quebracho, El Barrial, San Luis y Meanguera, todos del departamento de Morazán. Para facilitar el retorno de los compatriotas se están realizando obras de reparación en las vías de comunicación, según lo informó el coronel Humberto Corado, comandante del Destacamento Militar No.4, quien además afirmó que el gobierno esperaba unos 12 mil repatriados. Según Radio Venceremos, la Fuerza Aérea (FAS) ha bombardeado y

ametrallado los campamentos de repatriados ubicados en Meanguera; voceros del ejército han negado esas versiones.

En el transcurso de la primera semana de febrero, las acciones armadas registradas por el COPREFA han consistido en por lo menos 8 combates de encuentro y 6 ataques en 5 departamentos, con un saldo de 8 muertos y 7 heridos en las filas insurgentes, mientras que la Fuerza Armada habría sufrido 7 muertos y 14 heridos. Con todo, el rasgo más notable en lo que va de febrero son las acciones de sabotaje contra la infraestructura eléctrica y locales comerciales en San Salvador, que aunque son acciones militarmente más sencillas de ejecutar, estarían reflejando una organización rebelde capaz de burlar los dispositivos de vigilancia del ejército. Por lo demás, no puede olvidarse que, aunque aparentemente en estos momentos el FMLN está en una fase de repliegue táctico para evaluar los resultados de la ofensiva, también podría estar acopiando fuerzas para emprender nuevas acciones ofensivas. El propio jefe del Estado Mayor, coronel René Emilio Ponce, ha admitido que el FMLN podría tener todavía capacidad para lanzar otra ofensiva de dimensiones considerables sobre San Salvador.

Movimiento laboral de resistencia

Al arribar al segundo mes del año, el movimiento popular atraviesa un período que podría calificarse de "resistencia". Las organizaciones populares a las cuales la propaganda oficial ha vinculado consuetudinariamente al FMLN han sido el blanco principal de la violencia indiscriminada con que los aparatos represivos del Estado han reaccionado a la ofensiva guerrillera del 11 de noviembre pasado.

La primera medida de "ahogamiento" tomada por la Fuerza Armada fue saquear, cerrar y militarizar los locales de las organizaciones populares consideradas más beligerantes. En la última semana de enero, el gobierno ha querido aparentar una "desmilitarización" de éstos, cambiando las custodias uniformadas por efectivos vestidos de civil, e incluso ha ofrecido la entrega "inmediata" de los locales, pero rehusa devolverlos oficialmente haciendo inventario y acta notarial. Quiere entregar los locales vacíos y sin garantía alguna de seguridad.

Han persistido las capturas sistemáticas, las desapariciones y, en menor medida, los asesinatos contra los dirigentes y las bases de las organizaciones sindicales, campesinas, cooperativas, comunales, religiosas y humanitarias que han mostrado alguna posición crítica frente al gobierno.

La cobertura legal de este tipo de procedimientos la han brindado el estado de sitio y el toque de queda —este último recién levantado a partir del 1 de febrero—. Ambas medidas han servido de mampara para cometer numerosos atropellos, abusos y crímenes. Las restricciones a la libertad de expresión contempladas en el estado de sitio han estado orientadas a amordazar las denuncias, los pronunciamientos y las demandas del movimiento popular. Sobre los medios de prensa reuñentes a acatar la censura del Centro de Información Nacional (CIN) pesan considerables sanciones económicas.

El estado de sitio ha favorecido también el asesinato a mansalva de dirigentes y miembros de base de las organizaciones opositoras. El caso más reciente conocido por la prensa ha sido el asesinato de Blanca Marina Quinteros, de 16 años, miembro del Comité Juvenil de

ATENTADOS: El Ing. José Hernández, ex-precandidato de ARENA para alcalde de San Salvador y miembro del sector profesional de dicho partido, fue atacado a balazos por sujetos desconocidos la noche del 15.01. El Ing. Hernández mantenía fuertes vínculos ideológicos y de amistad con el Lic. Edgar Chacón y el Ing. Gabriel Payés, asesinados el año pasado por presuntos comandos urbanos de ultraizquierda. Según información publicada por **Diarlo Latino**, Hernández, al igual que Payés, también era fuerte crítico de la "argolla de ARENA", la cual impuso la candidatura a alcalde de Rafael Montalvo para las elecciones municipales de 1988 (a la postre, Montalvo fue sustituido por el Dr. Armando Calderón Sol). El 24.01, hacia las 6:30 am, sujetos desconocidos ametrallaron la residencia del coronel Carlos Humberto Figueroa, Viceministro del Interior, en la colonia Centroamérica. El coronel Figueroa atribuyó el atentado al FMLN. No se reportaron víctimas. Dos días más tarde, el 26.01, presuntos comandos urbanos del FMLN ametrallaron la residencia del presidente de ANTEL, Lic. Saúl Suster, ubicada en la colonia Utila, en Santa Tecla. En el atentado perecieron los agentes de la policía de ANTEL, Omar Ovidio Dávila y Juan Ernesto Hidalgo; y resultaron heridos de gravedad Rosendo Callejas y Santos Elvidio Argueta.

ASESINOS: El 22.01, la defensa de los militares implicados en la masacre de la UCA apeló contra la detención provisional de éstos, aduciendo que sus "confesiones extrajudiciales adolecen de un defecto que las vuelven inválidas, y es el hecho que nuestros acusados las ofrecieron después de las 72 horas de ser capturados". Uno de los abogados defensores afirmó que "no encontramos un asidero legal para la detención de nuestros defendidos y vamos a agotar todos los recursos hasta conseguir su libertad". Por su parte, otro de los defensores, el Dr. Oscar Caballero Peñate, declaró que "hemos criticado la declaración extrajudicial porque es una prueba amañada, y no hay manera de comprobar lo que dijeron; además nuestros defendidos fueron sometidos a una presión psicológica". Según el Dr. Caballero, "no existen elementos de juicio para la detención porque el Juez ha tomado como base para decretarla las pruebas extrajudiciales". El 25.01, la Fiscalía declaró sin lugar la revocatoria del auto de detención provisional solicitada por la defensa. El 29.01, el Juez Cuarto de lo Penal, Dr. Ricardo Zamora, declaró sin lugar la apelación. El Dr. Caballero Peñate declaró a la prensa que "no presentaremos más recursos y esperamos que se siga con las investigaciones, que están en su fase inicial".

Comunidades (CJC) del Comité de Comunidades Marginales (CCM), ocurrido el 29 de enero.

Blanca Marina había sido capturada por efectivos de la Primera Brigada de Infantería el 30 de noviembre pasado, junto a otros dos jóvenes del movimiento comunal. El día anterior habían sido capturados 17 miembros del CCM en el local de esta organización. Los tres jóvenes fueron conducidos al cuartel de la Policía Nacional, donde fueron sometidos por más de una semana a malos tratos y torturas psicológicas. Finalmente, fueron liberados por no encontrárseles pruebas de haber cometido delito alguno.

El 29 de enero, casi dos meses después de haber sido puesta en libertad, Blanca Marina acarrea agua para su vivienda, ubicada en la comunidad "El Bosque", en el cerro El Carmen, jurisdicción de Ayutuxtepeque. El sector estaba sometido a una intensa militarización por parte de efectivos de la Primera Brigada. Repentinamente, al soldado José Luis Carranza García "se le soltó" un disparo que hizo impacto en la espalda de la joven. Ante la alarma y protesta de los vecinos, el efectivo todavía tuvo el cinismo de replicar que "de un tiro no se muere nadie... ¡no armen tanto escándalo!". El soldado permaneció en el lugar durante algunas horas, mientras sus compañeros advertían a los vecinos que no dieran declaraciones y que dijeran "que no han visto nada". No obstante, al llegar la prensa al lugar del crimen y trascender la información al público, el comandante de la Primera Brigada, coronel Francisco Elena Fuentes, aseguró que Carranza García estaba ya bajo arresto cuartelario y sería castigado.

Los efectivos de la Primera Brigada llevaron a los familiares de la víctima un ataúd rústico, una bolsa con panes y 25 colones para pagar el entierro, todo lo cual rechazó la comunidad. Según declaraciones de los vecinos, el asesino había participado en la captura de Blanca Marina dos meses antes, y en los días previos había estado haciendo amagos de disparar contra la joven, aduciendo que ésta asistía a las "marchas" organizadas por el FMLN. Otros soldados del sector, compañeros de Carranza García, comentaban que éste era "loco" y que no era la primera vez que asesinaba a civiles a sangre fría. Incluso recordaban que en alguna oportunidad había disparado a los pies de un compañero suyo.

Independientemente de la trayectoria criminal de Carranza García, el asesinato de Blanca Marina Quin-

teros no es un hecho aislado, sino que forma parte de una larga cadena de agresiones contra el movimiento comunal por parte del ejército y de los cuerpos de seguridad. En el último trimestre han sido capturados 30 miembros del CCM, de los cuales 7 permanecen detenidos. En conjunto, desde la ofensiva del FMLN hasta la fecha, han sido capturadas más de 210 personas afiliadas a distintas organizaciones populares.

El movimiento popular, por su parte, se ha propuesto como tarea prioritaria presionar para que los espacios de participación social y política sean reabiertos. En conferencia de prensa dada el 23 de enero, la UNTS anunció acciones conjuntas con otras organizaciones para "ejercer presión por la apertura de espacios políticos cerrados por el gobierno a partir de la ofensiva del FMLN".

Con todo, actualmente, la UNOC es la organización laboral que menos problemas ha tenido para aprovechar los escasos espacios disponibles para las fuerzas sociales. Identificada desde su fundación con el PDC, como un intento para reconstruir su base social, la UNOC no es un blanco demasiado fácil para la propaganda oficial, la cual vincula al movimiento laboral organizado con el FMLN. Esto le ha permitido, en la coyuntura actual, mantener posiciones bastante críticas frente a la gestión de ARENA e incluso impugnar las medidas contra la libertad de expresión. El 23 de enero, su dirigencia interpuso ante la Corte Suprema de Justicia un recurso de inconstitucionalidad contra el estado de sitio, iniciativa que recibió el apoyo de la UNTS y de los partidos de oposición. Asimismo, ha presentado una propuesta propia de pacificación denominada "Alternativa para la paz en El Salvador", la cual coincide con las gestiones desplegadas por otros sectores sociales y políticos en favor de una solución política del conflicto.

Sin embargo, ni siquiera la UNOC se ha visto libre de la represión. El 23 de enero, efectivos de la Guardia Nacional capturaron al comité ejecutivo de la Central de Trabajadores Democráticos (CTD) en la sede de la organización, ubicada en la urbanización La Esperanza. Entre los detenidos figuraba el presidente de la CTD, Samuel Maldonado. Los captores ignoraron el permiso para la reunión, extendido por el coronel Juan Carlos Carrillo, jefe de plaza de San Salvador y director del mencionado cuerpo de seguridad. Los capturados fueron liberados horas después, gracias a las gestiones nacionales e internacionales de organizaciones a las cuales está afiliada la CTD.

CONJURA: Según un cable de ACAN EFE fechado en San Salvador el 15.01, el alcalde capitalino y presidente de ARENA, Dr. Armando Calderón Sol manifestó ese día que el asesinato de los jesuitas de la UCA "es algo tan horrendo, tan monstruoso, que hay que investigar la posibilidad de que el FMLN preparara ese asesinato para desprestigiar al gobierno". En esa línea, enfatizó que el gobierno salvadoreño "está obligado a descubrir a los autores de la muerte de los jesuitas y ver si hay algún nexo entre los militares involucrados y el FMLN". Según el Dr. Calderón Sol, "los responsables actuaron con iniciativa propia, para provocar problemas al gobierno del Presidente Cristiani, para desprestigiarlo; no es posible que sea un hecho aislado, las investigaciones van apuntando a un tipo de conjura".

CAPTURAS: Voceros de la Iglesia bautista Enmanuel denunciaron que la noche del 25.01 efectivos de la Policía de Hacienda vestidos de civil y fuertemente armados, quienes se conducían a bordo de dos vehículos particulares, capturaron a los misioneros bautistas, Vicente Garay (41 años), Víctor Manuel Fuentes (32) y Carlos Avalos (22), luego de que éstos salieran de las oficinas de la iglesia, ubicada en el barrio San Jacinto.

Malestar empresarial ante las medidas de ajuste

LISIADOS: El 17.01, los 32 lisiados de guerra del FMLN que ocupan la iglesia de El Calvario desde hace casi dos meses y medio, solicitaron a la ONU, la OEA y a los partidos "presionar" al gobierno salvadoreño para que permita su evacuación al exterior. Asimismo, denunciaron que el ejército los tiene "cercados e impide la visita de familiares y organismos humanitarios y el ingreso de alimentos" al lugar. Por otra parte, según denuncia difundida por **Diarlo Lalino** el 23.01, la señora Blanca Sosa fue capturada el 20.01 por haber dado limosna a los lisiados. La señora pasaba frente a El Calvario acompañada de su hija de 8 años; se dirigía a una farmacia a comprar medicinas para su anciana madre, Rosa Sosa, quien se encontraba ingresada en el Hospital Rosales para ser sometida a la amputación de una pierna. Según el testimonio de la niña, "mi mamá les dio peseta a unos señores cutíos que se encontraban frente a la iglesia y cuando siguió caminando unos hombres le preguntaron que por qué les había regalado pisto y que para dónde iba. Mi mamá les dijo que a comprar a la farmacia y los hombres enojados la subieron a un carro y le amarraron los ojos y a mí también me llevaron". Familiares de la señora Sosa informaron que ésta se encuentra detenida en la Policía Nacional "en vías de investigación".

Como parte de su programa de ajuste estructural, el gobierno ha anunciado nuevos incrementos en las tarifas de energía eléctrica y de agua que afectarán principalmente a las empresas del área comercial e industrial. Estas nuevas tarifas, sumadas a otras medidas fiscales, cambiarias y de precios, han comenzado a gestar un clima de malestar e incertidumbre entre los empresarios, especialmente entre aquéllos que se expresan a través de la Cámara de Comercio e Industria de El Salvador (CCIES), quienes aparentemente no acaban de comprender ni aceptar los costos que les corresponde asumir dentro de un programa de ajuste basado en el crecimiento hacia afuera.

La Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica del Río Lempa (CEL) anunció el 4 de enero su decisión de incrementar entre un 20 y 30 por ciento las tarifas de la energía eléctrica para consumo industrial y comercial. La CEL justifica la medida en función del saneamiento financiero de la institución ante la grave crisis económica por la que atraviesa. Según la CEL, el esquema tarifario subsidiado vigente desde 1980 ha imposibilitado cubrir sus costos de operación y mantenimiento, el servicio de la deuda y la realización de las inversiones necesarias para la expansión del sistema hidroeléctrico.

Otro ajuste de tarifas como medida de saneamiento financiero fue puesto en vigor a partir del 1 de enero por la Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA). El incremento abarca las áreas domiciliar, comercial e industrial. Sin embargo, según la tabla dada a conocer por ANDA, los mayores incrementos se concentran en las empresas que utilizan el agua para sus procesos de producción, mientras que para los hogares que consumen menos de 45 metros cúbicos (que constituyen el 87.7 por ciento de los usuarios), el incremento es relativamente bajo.

Pese al incremento en los costos de producción que las nuevas tarifas suponen para las empresas, las principales gremiales del sector privado las han recibido con relativa calma, posiblemente debido a que no estiman demasiado difícil trasladar los aumentos de costos a los consumidores. En cambio, han manifestado mayor rechazo a otras medidas del programa de ajuste.

En el área de precios, el Ministerio de Economía ha decretado a partir de enero la liberalización del precio de la melaza para alimentación del ganado. Como resultado de esta medida, el precio del galón de melaza se ha incrementado en un 100 por ciento. No obstante, el Ministerio asegura que tal incremento sólo incide en un 1.5 por ciento del total de costes de la ganadería, y que por tanto "no se justificaría ningún incremento en los precios de comercialización de la carne, lácteos, y otros derivados". El sector empresarial agrupado en AGES y PROLECHE ha discrepado de tal opinión. El 31 de enero, el presidente de PROLECHE afirmó que el gobierno "no alcanza a ver la magnitud de la importancia y de la crisis del sector ganadero, que desde hace 4 años viene con una economía de subsistencia, y en los últimos meses, con una economía de pérdidas"; y subrayó que el aumento del precio de la melaza "será como un tiro de gracia a la producción ganadera".

En relación al tipo de cambio, la "flotación" decretada desde julio de 1989 estaría creando serias dificultades a los importadores. El tipo de cambio del dólar en el mercado negro durante el mes de enero aumentó de 6.60 a 7.50 colones, lo cual obligó al mercado bancario a aumentar su cotización de 6.55 a 6.92 colones. Tal como lo ha denunciado la CCIES, el mercado bancario es insuficiente para cubrir la demanda de divisas de los importadores, lo cual los obliga a recurrir al mercado negro como su principal fuente de abastecimiento. Según la CCIES, esta situación no sólo encarece sus importaciones sino que "infla" artificialmente sus utilidades para efectos del impuesto sobre la renta, debido a que la contabilización del costo de adquisición de divisas toma como referencia el tipo de cambio vigente en el mercado bancario.

Con respecto al área fiscal, no obstante que las reformas tributarias recién aprobadas por la Asamblea Legislativa disminuyen significativamente la tasa de los impuestos a la renta y al patrimonio de las empresas (especialmente de la gran empresa), la CCIES ha rechazado categóricamente el sistema de pago a cuenta del impuesto sobre la renta, mecanismo con el cual el gobierno espera financiar buena parte de sus gastos corrientes para 1990 sin necesidad de recurrir a créditos del Banco Central de Reserva (BCR). Este sistema consiste en la retención y traspaso al fisco del 1 por ciento de los ingresos brutos mensuales de las empresas, remitiendo al final del ejercicio la devolución del excedente o

FISCAL: El Dr. Ricardo Zaldívar Baldwin y la Lic. Elizabeth Zaldívar de Bustamante, accionistas mayoritarios de la firma "Helga, S.A. de C.V.", propietaria del Hospital Zaldívar, solicitaron el 25.01 a la Asamblea Legislativa un antejuicio contra el Fiscal General de la República, Dr. Mauricio Eduardo Colorado, a quien acusaron, entre otros delitos, de usurpación violenta, violación de lugar de trabajo, amenaza agravada y coacción agravada. Según los denunciantes, el 12.01 el Dr. Colorado, apoderado de la gerente general del hospital, Linda Zaldívar de Gállegos (accionista minoritaria de la firma y hermana de los denunciantes, con quienes sostiene un pleito familiar) irrumpió violentamente en el hospital "acompañado por un séquito de 20 hombres fuertemente armados"; intimidó al personal médico, paramédico y administrativo; y se posesionó de la oficina de la gerencia general, a donde mandó llamar al Dr. Zaldívar, a quien comunicó que el Hospital había pasado a ser propiedad de una nueva firma y que si quería "la tercera parte de las acciones de la nueva sociedad tendría que entregar sus acciones de Helga si no quería perder todo". Como el Dr. Zaldívar no aceptó la "oferta", el 15.01 el personal de seguridad del Dr. Colorado le impidió ingresar al hospital. Un día después, los guardaespaldas tomaron su mobiliario e instrumental médico para impedirle trabajar.

DELEGACION: El 20.01 arribó al país una delegación de la Internacional Socialista (IS), presidida por el secretario general de la IS, Luis Ayala. Formaban también parte de ella el secretario general del MNR, Dr. Guillermo Ungo; el dirigente de Acción Democrática de Venezuela, Timoteo Zambrano; el Dr. Wolfgang Weege, del Partido Social Demócrata alemán; y Dan Heat, del Nuevo Partido Demócrata de Canadá. El 21, los visitantes se reunieron con el coronel Ponce para solicitarle la colaboración castrense en la investigación del asesinato del Dr. Héctor Oquell. El 22 se entrevistaron con el Presidente Cristiani, a quien expusieron su preocupación por "la falta de garantías y de espacio para los partidos democráticos". En conferencia de prensa, el Dr. Ungo afirmó que "El Salvador no puede descargar todo el peso de la investigación en Guatemala, porque se sabe que existen lazos entre la extrema derecha de los dos países desde hace muchos años"; y recordó que los propios sindicatos guatemaltecos han denunciado recientemente los frecuentes viajes a ese país de "personas bien conocidas por su vinculación con los escuadrones de la muerte", como Antonio Regalado, a quien el gobierno de Duarte acusó de ser el asesino material de Monseñor Romero.

bien el pago de la diferencia sobre la renta imponible. Según la CCIES, este sistema redundaría en "una pérdida de liquidez, en aumento de costes financieros y en una disminución de recursos que podrían utilizarse para incrementar el capital de trabajo o para paliar la apretada situación financiera en que las empresas se encuentran".

Finalmente, ha comenzado a gestarse otro foco de malestar en torno al inminente aumento de los precios de la gasolina, que el Ministerio de Economía justifica en función de adecuarlos al aumento experimentado por el precio mundial del petróleo. Hasta el momento, el sector más descontento frente a la medida parece ser la Asociación Salvadoreña de Distribuidores de Productos de Petróleo. Según los distribuidores, el alza de los precios de la gasolina proviene de la privatización de la importación del crudo, la cual estaba en manos de la CEL pero a partir de enero ha pasado a una compañía privada subsidiaria de las multinacionales ESSO-SHELL, las cuales estarían presionando al gobierno para incrementar el precio de los derivados del petróleo a fin de obtener mayores ganancias. Al parecer, los distribuidores mocionan para que la CEL reasuma la importación del crudo, esto es, en cierto sentido, para "desprivatizarla", lo cual contrasta abiertamente con la política de privatización que ARENA pretende impulsar en el área de los hidrocarburos en 1990 y que el presidente de la CEL anunció el 23 de enero a representantes del sector privado. La propuesta de privatización presentada por la CEL abarcaría no sólo la importación de petróleo sino también su procesamiento y producción.

Todo parece indicar que el único sector empresarial complacido con las medidas de ajuste estructural de ARENA es el vinculado a la producción y exportación de café. El presidente de la Asociación Cafetalera (AS-CAFE) ha declarado que pese a la situación deprimida de los precios mundiales del grano, las mejores condiciones crediticias anunciadas por el BCR y el aumento en el tipo de cambio ponen a la caficultura "por fin en vías de volver a ser rentable".

Las reacciones de industriales y comerciantes apenas iniciado el programa de ajuste para 1990 y cuando todavía quedan por implementarse medidas más "fuertes" (como una nueva reducción de aranceles) evidencian no sólo un generalizado desconocimiento de los programas de este tipo sino también de sus efectos diferenciados sobre los distintos agentes económicos. Una vez más, la ideología no resulta compaginable con la realidad.

Hacia un nuevo horizonte regional

Con el inicio de la década de 1990, el proceso regional de paz parece a punto de emprender una nueva etapa de su, hasta ahora, irregular y complejo desarrollo. Este relevante hecho se pone de manifiesto, ante todo, en la aparición, dentro de la escena regional, de nuevos protagonistas de las iniciativas de distensión. La inminente salida de Oscar Arias de la Presidencia de Costa Rica deja a los acuerdos de Esquipulas II sin su arquitecto y principal promotor. Algunos observadores del proceso de paz se preguntan ya si con ello no perderá vigencia el esfuerzo de los Presidentes centroamericanos para buscar con relativa autonomía soluciones propias a los agudos problemas de la región. Lo cierto es que, al margen del estilo propio y de las convicciones personales introducidas por los nuevos gobernantes en los foros de negociación, la necesidad estructural de alcanzar la paz en el área a través de medios políticos se impone con la fuerza y la razón de la historia.

El conflicto salvadoreño es simbólico en relación a este punto. El gobierno norteamericano aparentemente empieza a comprender que después de financiar a lo largo de la década una estéril opción militar, la mejor salida al conflicto —sin que sus intereses queden necesariamente defraudados— consiste en promover el proceso de negociación entre las partes en pugna. El testimonio ofrecido el 24 de enero por el subsecretario de Estado para asuntos latinoamericanos, Bernard Aronson, ante las subcomisiones de asuntos del hemisferio occidental y de operaciones internacionales de la Cámara de Representantes, en el marco de las discusiones sobre la continuación de la ayuda a El Salvador, evidencia este giro de la estrategia norteamericana. Aronson afirmó a los congresistas que "ha llegado el momento de poner fin a la matanza en El Salvador. Ha llegado el momento de ponerle fin a la guerra... Muchos tratarán de explotar la memoria y el nombre del Padre Ellacuría, pero el único tributo adecuado es un compromiso renovado de parte de la comunidad internacional para movilizar todos los recursos y presiones que se puedan aplicar para negociar el fin del conflicto en El Salvador y garantizar un espacio político seguro en el proceso democrático para todos".

OBISPO: El obispo anglicano de Edimburgo, Richard Holloway, quien visitó recientemente El Salvador como enviado especial del Arzobispo de Canterbury, Robert Runcie, comentó el 15.01, en Londres, que le parecía positivo que las investigaciones en el caso de la masacre de la UCA hayan llegado ya por lo menos a un coronel, ya que sería "demasiado esperar" que detuvieran a un general. Holloway añadió que la presión norteamericana ha sido clave para esclarecer el caso, pues "a fin de cuentas eran norteamericanas las balas que mataron a los jesuitas". Expresó que su visita a la residencia donde éstos fueron masacrados "fue la experiencia más conmovedora de mi vida". Por otra parte, en relación al asesinato del Dr. Héctor Oquell, opinó que "los asesinos pudieran haber sido guatemaltecos o salvadoreños, pero es una distinción innecesaria, dado que los escuadrones de la muerte de ambos países colaboran entre sí. El obispo manifestó que sugeriría al gobierno británico apoyar al Presidente Cristiani "para que no le tiemble la mano" al enfrentarse con los militares y los escuadrones de la muerte. Asimismo, opinó que sería conveniente presionar a Cristiani para que la Fuerza Armada no hostigue la labor de los organismos humanitarios y favorecer una solución negociada al conflicto.

PARLAMENTARIOS: Una delegación de la Cámara de los Comunes de Gran Bretaña, integrada por Mark Wolesson (conservador), Peter Archer (laborista) y Russell Johnston (unión de socialdemócratas y liberales), difundió el 19.01 un informe sobre los resultados de su visita a El Salvador realizada entre el 14 y 17.01. En el informe señalan que la ayuda norteamericana al gobierno salvadoreño está "lejos de ser efectiva" y recomiendan que la asistencia militar se destine "al apoyo directo de los derechos humanos". "En caso de no hacerlo así —señalan— la política internacional sobre derechos humanos del Presidente Bush se verá seriamente desacreditada". Durante su estadía en El Salvador, la delegación se entrevistó con el Presidente Cristiani, la Compañía de Jesús y dirigentes de izquierda. Los parlamentarios calificaron como "muy positiva" su entrevista con Cristiani, pero lamentaron que la situación actual de los derechos humanos en el país es "en general muy pobre... personas o grupos opuestos al gobierno son objeto de detenciones y frecuentes torturas, brutales en algunos casos. Las ejecuciones extrajudiciales y desapariciones perpetradas por los escuadrones de la muerte y fuerzas de seguridad continúan llevándose a un ritmo de doce por mes".

Aún están por verse los resultados concretos de la nueva coyuntura, aparentemente favorable al reinicio de las conversaciones de paz en El Salvador. Entretanto, en la región, los dinamismos de Esquipulas II continúan orientados hacia la normalización de las relaciones entre Estados Unidos y Nicaragua, la definitiva desmovilización de los contras, y el despliegue de ONUCA en las fronteras del área para fiscalizar que el territorio de un país no se utilice como plataforma para la agresión de otro. El normal desarrollo del proceso electoral nicaragüense juega un papel crucial en la consolidación de todos estos objetivos. Lamentablemente, el gobierno norteamericano no está contribuyendo constructivamente a su sano desenvolvimiento, aunque la presencia de observadores internacionales imparciales ha evitado que dicha interferencia desnaturalice los esfuerzos de democratización impulsados por el gobierno nicaragüense.

A lo largo de todo el proceso electoral en Nicaragua, la Administración Bush ha mostrado abiertamente su respaldo a la coalición opositora de la UNO. Con todo, tal apoyo no se ha traducido en ventajas efectivas para la candidata de la UNO, Violeta de Chamorro. En primer lugar, la burocracia, tanto del gobierno norteamericano como del gobierno nicaragüense, ha impedido la llegada de toda la millonaria asistencia económica de Estados Unidos para financiar la campaña electoral de la oposición. Ello ha motivado incluso acciones poco usuales del Ejecutivo norteamericano, quien habría formulado un llamado a los partidos demócrata y republicano para colaborar de forma más decidida con el financiamiento de la UNO. En segundo lugar, la invasión norteamericana a Panamá ha tenido un impacto negativo en la imagen de Violeta de Chamorro. Su vinculación con el gobierno norteamericano y el histórico y profundo sentimiento anti-imperialista del pueblo nicaragüense motivó un significativo descenso de la candidata opositora en los más recientes sondeos de opinión. Los cables de prensa informan que "la impresión predominante entre los diplomáticos (acreditados en Managua) es que los sandinistas van a ganar los comicios".

Frente a una situación tan adversa, la UNO ha denunciado la preparación de un "franco proceso de fraude electoral" por parte del gobierno. La Administración Bush ha respaldado tales denuncias. Según la portavoz del Departamento de Estado, Margaret Tutwiler, la intención al difundirlas ha sido "centrar la atención pública en abusos electorales de manera rápida y visible para

prevenirlos". Naturalmente, el gobierno nicaragüense ha negado categóricamente las acusaciones y destacado la imposibilidad de fraude bajo las condiciones en las que transcurre el proceso electoral. Según el Presidente Ortega, las denuncias de la UNO expresan "simplemente el razonamiento de alguien que sabe que ya está derrotado y está buscando la justificación para huir del combate y no participar en las elecciones".

Este tipo de discrepancias son totalmente comprensibles dentro de una sociedad polarizada y, en tal contexto, el juicio de los observadores internacionales adquiere el valor práctico de zanjar por medio de una evaluación objetiva la disputa entre las partes. Todos los observadores del proceso electoral han emitido su opinión en torno a las acusaciones de la oposición. El ex-presidente Jimmy Carter —un observador influyente sobre el gobierno norteamericano para determinar la justeza de los comicios— aseguró, durante su última visita a Managua, que no había encontrado pruebas del presunto fraude en preparación. Funcionarios de la ONU y de la OEA, por su parte, han declarado al **Washington Post** que consideran "infundadas y prematuras" las dudas sobre la limpieza de las elecciones externadas por la oposición y por el gobierno norteamericano. Según las fuentes informativas del **Post**, Estados Unidos "podría estar exagerando deliberadamente sus denuncias con la intención de manipular a la opinión internacional". Por su parte, el tercer informe de ONUVEN —la misión de observadores de la ONU en Managua— dado a conocer el 5 de febrero, destaca la "insistencia por parte de la oposición en la impugnación casi sistemática del poder electoral en Nicaragua". El informe añade que "la actitud de seguir el juego, pero impugnando plenamente el árbitro, induce a pensar en un esfuerzo de deslegitimación, salvo que se trate de una arriesgada estrategia electoral".

Hasta el momento, todos los observadores internacionales del proceso electoral en Nicaragua coinciden en afirmar que éste, a pesar de sus deficiencias, se desarrolla con suficiente limpieza y normalidad. Si Estados Unidos y la UNO asumieran una posición más constructiva, su limpieza sería mayor.

VIAJE: El Presidente Cristiani viajó el 26.05 a Tegucigalpa para asistir a la asunción presidencial de Rafael Callejas. Fue acompañado por su esposa, Margarita de Cristiani; el canciller, Dr. José Manuel Pacas Castro; el Ministro de Defensa, general Rafael Humberto Larios; el jefe del Estado Mayor, coronel René Emilio Ponce; el secretario privado de la Presidencia, Arturo Tona; y el secretario nacional de comunicaciones, Lic. Mauricio Sandoval.

ENCUESTAS: Según un sondeo de opinión realizado por la empresa Greenberg-Lake en el mes de enero, el Presidente Daniel Ortega contaría con el apoyo del 51 por ciento del electorado nicaragüense, frente a un 24 por ciento de simpatías para la candidata de la UNO, Violeta de Chamorro. Tras ellos estaría el candidato del Partido Social Cristiano, Erick Ramírez, con el 3 por ciento. En una encuesta realizada por la misma firma en noviembre, Ortega contaba con el 44 por ciento de la intención de voto, frente a un 27 por ciento de Violeta de Chamorro. Según Stanley Greenberg, presidente de la empresa encuestadora, el incremento en las simpatías de Ortega podría deberse a la invasión norteamericana a Panamá. La encuesta de Greenberg-Lake es bastante convergente con las realizadas por la Universidad Centroamericana (UCA) de Managua y Estudios y Consultas de Opinión (ECO).

PRESENTACION

El boletín "Proceso" sintetiza y selecciona los principales hechos que semanalmente se producen en El Salvador y los que en el extranjero resultan más significativos para nuestra realidad, a fin de describir las coyunturas del país y apuntar posibles direcciones para su interpretación.

Sus fuentes son los periódicos nacionales, diversas publicaciones nacionales y extranjeras, así como emisiones radiales salvadoreñas e internacionales.

Es una publicación del Centro Universitario de Documentación e Información de la Universidad Centroamericana "José Simeón Cañas".

SUSCRIPCION ANUAL

El Salvador	
personal	€50.00
correo	€60.00
Centroamérica y Panamá	\$25.00
Norte y Sur América	\$35.00
Europa	\$40.00
Otras regiones	\$45.00

Los suscriptores de El Salvador pueden suscribirse en la Oficina de Distribución de la UCA o por correo. Los cheques deben emitirse a nombre de la Universidad Centroamericana y dirigirse a Centro de Distribución UCA. Apdo. Postal (01) 575, San Salvador, El Salvador, C.A. Teléfono: 240744 y 240011 Ext. 161 y 191.

